



CHILE, LA CRISIS MAS GRAVE DE LA U. P.

El Partido de izquierda radical que se ha retirado del frente de Unidad Popular de Chile es pequeño: es una escisión de izquierda moderada del movimiento radical, Allende ha minimizado el tema, ha sustituido a los dos ministros que el PIR se ha llevado —uno de ellos, el de Minería, por un general, Palacios: más que por militar, por experto en el tema de su ministerio—, pero, en realidad, no está en momentos de prescindir de nada ni de nadie. La crisis política general del país es aguda. El Parlamento está en manos de la oposición, y la oposición —encabezada, ahora, por la democracia cristiana de Eduardo Frei—, no está dispuesta a ninguna clase de tolerancia con el régimen de Allende. Le combate en la calle, con manifestaciones o intentos de manifestación, en el extranjero y en el Parlamento.

La disputa parlamentaria se centra en las nacionalizaciones y las socializaciones. El Congreso ha aprobado una reforma constitucional que impide al Gobierno continuar las expropiaciones por Decreto: cada una de ellas debe ser presentada en forma de proyecto de Ley, y aprobada por el Congreso. La reforma requiere que una nacionalización sea aprobada por mayoría absoluta, por la mitad más uno de los congresistas, y la Unidad Popular no dispone de esa mayoría. Allende insiste en vetar la reforma, pero la oposición sostiene que el veto no es legal, y ha de ser aprobado por el Parlamento. El Tribunal Constitucional deberá decir si la enmienda a la Constitución debe entrar automáticamente en vigor, incluso si puede tener carácter retroactivo; si el Presidente tiene o no derecho de veto, si la enmienda a la Constitución debe ser sometida a referéndum popular. Está claro que la oposición tiende a presentar a Allende un dilema grave: o salta por encima de la legalidad y se expone a una guerra civil y a la pérdida de la mejor garantía que ofrecía su régimen —el de haber llegado al poder por vía electoral y respetar el juego democrático preestablecido—, o acepta las condiciones de la oposición mayoritaria, y en ese caso se enfrenta con el pueblo y los partidos revolucionarios que consideran válido al Gobierno de Unidad Popular solamente en cuanto sea capaz de cambiar las estructuras del país. Aún Allende tiene una posibilidad: la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones generales para formar uno nuevo. Una medida que debía haber adoptado hace tiempo: quizá ahora disponga en la calle de una mayoría menor de la que le llevó a la presidencia. Es cierto que la publicación de los reportajes del columnista Anderson, revelando los datos de una conjura entre la CIA, la ITT —como gran empresa inversionista en Chile—, y algunos políticos chilenos le ha favorecido, como le han favorecido también los intentos de complot y atentado recientemente descubiertos. Pero no le favorece en nada la situación económica general y el ambiente de inseguridad, miedo y desconcierto que, indudablemente, ha sido creado por la oposición. La salida del PIR parece ser un indicio precisamente del miedo de las clases burguesas de la izquierda moderada.

El Gobierno de Unidad Popular, la experiencia Allende, pasa en estos momentos por su crisis pública más grave. Si consigue superarla, sin graves pérdidas de programa, el régimen probablemente quedará establecido para largo tiempo. Pero no hay ninguna seguridad de que lo consiga. ■ JUAN ALDEBARAN.

TRAS HABER COMPRADO A LA JUSTICIA DE SU PAIS, UN «TRUST» AMERICANO PRETENDIO FINANCIAR EL DERROCAMIENTO DE ALLENDE.

QUE unos «gangsters» se sirvan de la electrónica no pasa de ser un asunto más o menos banal. Pero que una de las mayores firmas de la electrónica se sirva del «gangsterismo», ¡ah, eso ya es mucho más grave! Pues bien, desde hace un mes, aproximadamente, el pueblo americano tiene a su disposición un buen «ejemplo», relacionado con una serie de prácticas que se suponían se llevaban a cabo, pero de las que no existían pruebas tangibles. A saber: el modo que tiene un gran «trust» de comprar a los políticos, de presionar sobre un Gobierno y de promover un golpe de Estado a fin de proteger sus propios intereses.

El «trust» en cuestión es la ITT (International Telegraph and Telephone). Se trata de la octava sociedad americana, por orden de importancia. «Pesa» 8.000 millones de dólares y da trabajo a un total de 350.000 personas dentro de los Estados Unidos y a 200.000 en más de ochenta países del extranjero. Sus actividades van desde la industria espacial hasta los satélites de telecomunicaciones, desde la fabricación de cables submarinos hasta la de centrales telefónicas. En el transcurso de los diez últimos años, la ITT se ha venido dedicando a comprar y absorber compañías de todo tipo: la cadena de hoteles Sheraton, la sociedad Avis de alquiler de coches, fábricas de conservas alimenticias, una editorial, compañías de seguros...

La ITT se ha convertido en una especie de Estado dentro del Estado: posee su propia flota de aviones a reacción, su propio sistema de escuchas telefónicas, de contraespionaje y de información, que la mantienen al corriente de las decisiones que se preparan en el seno de los Gobiernos extranjeros, con lo cual el gran «trust» americano puede tratar de influir sobre dichos Gobiernos. Es, pues, natural que entre los administradores de la ITT figure, junto a los banqueros de los prin-

cipales países capitalistas, un hombre que tiene fácil acceso a las fuentes de información del mundo entero así como a los centros de decisión político-militar de los Estados Unidos: John A. McCone, ex director de la CIA.

En 1969, sin embargo, la ITT tropieza con un obstáculo inesperado. Un funcionario del Estado de Connecticut trata de impedir con su veto que la ITT asuma el control de una gran compañía de ese Estado, la Hartford Fire Insurance. El funcionario en cuestión declara que la operación resulta sospechosa y que es contraria al interés público. Pero la ITT vence fácilmente dicho obstáculo. El funcionario, un tal Cotter, desea presentarse a las elecciones para congresistas de 1970: la compañía le ofrece 100.000 dólares para su campaña electoral y Cotter da un viraje de 180 grados, convirtiéndose en el más elocuente de los abogados de la ITT.

En el Ministerio de Justicia de Washington, no obstante, un tal McLaren, magistrado de la comisión «antitrusts», frunce el entrecejo. Entabla contra la ITT un proceso que pueda «servir de ejemplo» y se declara decidido a recurrir al Tribunal Supremo si es preciso, pues, según él, tiene un 60 por 100 de probabilidades de ganar. Esto ocurría el 24 de febrero de 1971.

Esta vez, la ITT emplea su artillería pesada. Interviene cerca del ex ministro de Justicia, Mitchell; de su sucesor, Kleindienst, y —según los documentos aportados por el periodista Jack Anderson— hace una oferta escrita en los siguientes términos: si el Ministerio de Justicia retira su demanda contra la ITT, esta última financiará con 400.000 dólares la convención del partido republicano en San Diego, a celebrarse en el pasado otoño. La oferta parece «normal» a los amigos de Richard Nixon: la convención demócrata de 1968 se desarrolló en un hotel de la cadena Sheraton, y ni las cuentas del hotel ni las facturas del teléfono fueron jamás satisfechas.

Doce semanas después de haber proferido sus amenazas contra la ITT, el magistrado McLaren aboga de repente por un arreglo amistoso. Poco después es promovido a juez federal de Chicago.

Aún no se había apagado el escándalo provocado por estas revelaciones cuando, hace dos semanas, el periodista Jack Anderson volvió a la carga, publicando una nueva serie de documentos secretos extraídos, no se sabe cómo, de los archivos de la ITT: esta

EL PUTSCH FALLIDO DE LA ITT

vez se trata de un conjunto de cartas y memorándums reveladores de los esfuerzos de la ITT para promover, con ayuda de la CIA, del Departamento de Estado y de la Casa Blanca (infructuosamente en este último caso) un «putsch» militar preventivo contra Salvador Allende, Presidente electo (aunque por aquel entonces aún no investido) de Chile.

Los esfuerzos de la ITT para impedir la investidura de Allende comenzaron nada más ser elegido éste para la Presidencia en septiembre de 1970. El 14 de septiembre, el director de asuntos internacionales de la ITT, J. D. Neal, telefona a la Casa Blanca. Su interlocutor es Viron Vaky, experto en asuntos latinoamericanos a las órdenes de Henry Kissinger. Neal comunica a Vaky que el pre-

sidente de la ITT, Harold Geneen, «está dispuesto a trasladarse a Washington» (condescendencia que conviene apreciar en su justo valor) a fin de discutir la situación en Latinoamérica y la protección de los intereses de la ITT en Chile: «Estamos dispuestos —hace saber la ITT— a participar en los esfuerzos del Gobierno americano mediante una contribución financiera que puede llegar a ser de siete cifras» (es decir, un millón de dólares como mínimo).

El acuse de recibo de este mensaje no se hace esperar. Según un memorándum de la ITT del 15 de septiembre, el Departamento de Estado concede al embajador americano en Chile, «en nombre del Presidente Nixon, plenos poderes para impedir el acceso al poder de Allende por todos los

medios posibles, aunque sin llegar a una acción de tipo dominicano» (es decir, un desembarco de «marines»).

Algunos días más tarde se recibe un nuevo memorándum de la ITT, en el que se recomienda «una provocación», así como «presiones sutiles pero firmes», para desencadenar un golpe de fuerza de los militares chilenos y obligar al ex Presidente del país, Eduardo Frei, a hacer causa común con los golpistas. Este plan, asegura un memorándum del 22 de septiembre, ha sido discutido con «nuestro contacto» en Washington: se trata de William Broe, director de la división de servicios clandestinos de la CIA en América Latina. Según los memorándums fechados los días 22 y 29 de septiembre, Broe recomienda que «se ejerzan todas las

presiones posibles» y somete a la ITT un plan que paralizará la economía chilena, provocará disturbios sociales y dará al Ejército chileno un buen pretexto para entrar en acción.

El hombre elegido para llevar a cabo la provocación, que desencadenará el alzamiento militar, es el general chileno Roberto Viaux. Este debe actuar el 30 de septiembre. Pero ese día, el Departamento norteamericano de Estado le hace saber que el momento no está bien elegido, que los preparativos son insuficientes: conviene retrasar el «putsch», para lo cual Washington promete «ayuda material y apoyo por parte de los Estados Unidos y otros países». Pero el 22 de octubre, un comando teledirigido por el general Viaux rapta y asesina al comandante en jefe chileno, general Schneider.

Al día siguiente, el director de la ITT en Washington dirige a Henry Kissinger un largo memorándum, en el que se declara que «ha llegado el momento de revisar y reforzar la política latinoamericana de Estados Unidos». Esta declaración va seguida de una serie de recomendaciones. Sin embargo, la respuesta de Kissinger —lacónica y fría— no llegará hasta después de la instalación de Allende en el poder.

La red telefónica de la ITT en Chile ha sido nacionalizada por el Gobierno del país (sin indemnizaciones). La revisión de cuentas ha revelado lo siguiente: mientras que en virtud de un acuerdo firmado en 1930, por un plazo de cincuenta años, se garantizaba a la ITT unos beneficios netos del 10 por 100 sobre el total de inversiones realizadas, la compañía americana realizaba unos beneficios netos de hasta el 25 por 100 anual. ¿Cómo? Sencillemente facturando a un múltiple de su precio normal las piezas de recambio e instalaciones con que abastecía a su filial chilena. De ese modo realizaba una ganancia neta anual de 38 millones de dólares, lo cual suponía una excelente inversión.

«¿Qué sistema es este —exclama el «Washington Post»—, que autoriza a los dirigentes de un gran «trusch» a pasearse por los corredores del Gobierno como por su propia casa? ¿Cómo podía proyectar un Presidente americano, en pleno 1970, una intervención destinada a impedir el acceso al poder al Presidente de un país supuestamente amigo?». El «Washington Post» no contesta a esta pregunta. ■ MICHEL BOSQUET.

El subcomité judicial del Senado, reunido en Denver para investigar el escándalo de la ITT.

